JOSÉ MARÍA ARBOLEDA LLORENTE, *El indio en la Colonia*.—Bogotá, 1948.
Ministerio de Educación. 210 pp.

Leyendo los libros corrientes de historia parece que nada se conoce mejor que la situación del indio y el trato que recibió durante el régimen colonial de España. Pero el concepto que reflejan los diferentes autores es diametralmente opuesto. Afirman algunos rotundamente que los españoles fueron unos colonizadores ambiciosos, fanáticos, brutales y sanguinarios, que explotaron, torturaron y muchas veces mataron indios. Aseguran otros que la colonización, regida por leyes sabias y justas y aplicada por funcionarios en su mayoría rectos —que no pudieron, sin embargo, evitar algunos graves abusos— civilizó a los indios enseñándoles principalmente la lengua castellana y la religión de Cristo.

Cierto es que para defender una y otra tesis pueden invocarse muy buenos textos. De un lado, a fray Bartolomé de las Casas en su *Brevísima relación de la destrucción de las Indias*. Según el “apóstol de los indios”, “los españoles en su trato con las gentes de la colonia no hicieron otra cosa que despedazarlos, matarlos, angustiarlos, afligirlos, atormentarlos y destruirlos por las extrañas y nuevas y varias, nunca otras tales vistas ni leídas ni oídas, maneras de crueldad”. “Estos hombres entraban en los pueblos, ni dejaban niños, ni viejos, ni mujeres preñadas ni paridas que no desbarrigarán y hacían pedazos”. “Hacían apuestas sobre quién de una cuchillada abría el hombre por medio o le cortaba la cabeza de un piquete, o le descubría las entrañas. Tomaban las criaturas de las tetas de las madres por las piernas y daban de cabeza con ellas en las peñas”. “Comúnmente mataban a los señores y a los nobles de esta manera: que hacían unas parrillas de varas sobre horquetas y atábanlos en ellas y poníanles por debajo fuego manso, para que poco a poco, dando alaridos en aquellos tormentos deseseparados, se les salían las ánimas.”

Por otra parte, en las “Leyes nuevas de Indias”, se lee, entre otros preceptos, lo que sigue: “Item ordenamos y mandamos que de aquí adelante por ninguna causa de guerra ni otra alguna aunque sea so título de rebelión ni por rescate ni de otra manera no se pueda hacer esclavo indio alguno y queremos sean tratados como vasallos nuestros de la corona de Castilla, pues lo son”. “Ninguna persona se puede servir de los indios por vía de naboria ni tapia ni otro modo alguno contra su voluntad”. “Item mandamos que sobre el cargar de los dichos indios

las audiencias tengan especial cuidado que no se carguen y en caso que esto en algunas partes no se pueda excusar que se haga de tal manera que de la carga inmoderada no se siga peligro en la vida, salud y conservación de los dichos indios". "Mandamos que ningún indio libre sea llevado a dicha pesquería (de perlas) contra su voluntad, so pena de muerte". "Asimismo las dichas audiencias se informen de cómo han sido tratados los indios por las personas que los han tenido en encomienda y si les constare que de justicia deben ser privados de ellos por sus excesos y malos tratamientos que les han hecho mandamos que luego los priven y pongan los tales indios en nuestra corona real".

Podrían multiplicarse de un lado y otro muy valiosas citas. ¿Pero qué hay de verdad histórica en ambas posiciones antagónicas? En cuanto a la *Brevísima relación*, se reconoce hoy generalmente que no tiene el valor de un testimonio rigurosamente histórico. La escribió fray Bartolomé de las Casas, ardiente apóstol y elocuente abogado de los indios, para que sirviera como alegato judicial en sus pretensiones de que el rey legislara en favor de los indígenas de las colonias. Y al abogar utiliza, con moral de letrado defensor, los recursos que le parecen más eficaces para impresionar a la corona de Castilla. Y en cuanto a las Leyes de Indias, hemos de lamentar que en parte recibieron la acogida de "se acata pero no se cumple". Así fué como, con leyes excelentes, pero que no se cumplieron íntegramente; con virreyes, gobernadores y presidentes de audiencias en su mayoría rectos, por no ser todos los "encomenderos" suficientemente humanos y dejarse llevar de la ambición, fueron los indios objeto de abusivos y crueles tratos.

Pero esta es la impresión general que debería precisarse en función del tiempo y del espacio, pues indudablemente en los tres siglos de colonización y en los extensos dominios coloniales de España en América no se dió a los indios el mismo trato. Hubo seguramente diferencias grandes de período a período, de país a país y aun de comarca a comarca. Esto es lo que no se conoce, pues ni siquiera se ha investigado bien. Los que escriben libros de historia siguen las directrices de su inclinación. Son hispanistas, inclinados a atenuar todo lo malo que hicieron los encomenderos, pensando que está más que compensado por la adquisición de la religión cristiana y de la civilización española. O son indigenistas, mejor dicho, anti-hispánicos, que tienden a recargar las tintas del cuadro de los malos tratos recibidos por los indios durante el período colonial.

Pero la historia no es una referencia de los hechos ajustada a prejuicios ideológicos de tipo cultural, nacionalista o político. Es —debe ser, en lo posible— un esfuerzo para encontrar la verdad de lo sucedido, de los hechos que ocurrieron, y una exposición lo más exacta y puntualizada del resultado de las investigaciones, cuando es fidedigno. De la situación del indio en la colonia española sólo hay versiones generales y sectarias que es indispensable depurar y precisar. ¿Mas es esto posible? Parece que sí. Partiendo de la idea de que las leyes eran buenas, ha de investigarse cómo se cumplieron, no dando por supuesto unilateralmente que todos los funcionarios eran buenos y que todos los encomenderos eran malos. En los archivos hay una riqueza inmensa de datos cuya exploración cuidadosa y leal conduciría a precisar cuál fué realmente la situación del indio bajo el régimen colonial de España, a través de casi tres siglos de duración y en las diversas zonas de su dominio. En los viejos y polvorientos legajos de los archivos de Hispanoamérica están las fuentes de una investigación y del descubrimiento de una verdad que en su precisión cronológica y geográfica no poseemos aún y apremiantemente necesitamos. Es un problema fundamental para la cultura hispánica de ambos lados del Atlántico.

Un historiador de buena cepa, de los que buscan la verdad donde puede encontrarse aun a costa de los mayores esfuerzos, el señor José María Arboleda Llorente, ha explorado durante veinte años en el Archivo Central de Cauca, Colombia, donde se conserva toda la documentación oficial de la antigua Gobernación colonial de Popayán. Es un archivo extraordinariamente rico, ya que la Gobernación (que dependió primeramente del Virreinato del Perú y después del de Santa Fe) ejercía su jurisdicción desde Otavalo, en lo que es hoy República del Ecuador, hasta el mar Caribe, y desde el Océano Pacífico hasta el río Magdalena y las heladas cimas del Sumapaz. Fruto de las investigaciones del señor Arboleda es el libro que estoy reseñando, editado por el Ministerio de Educación de la República de Colombia, en el que hace público el contenido de importantes documentos relativos a resoluciones dictadas por las autoridades coloniales en asuntos relacionados con los indios. Y éste es, a mi entender, el camino que ha de seguirse para poner en claro, mediante el examen de hechos concretos y su posible valoración aritmética, cuál fué en realidad el trato dado a los indios en las diferentes zonas de la colonia y en los sucesivos períodos del dominio español. Los hechos demostrados documentalmente y no los supuestos preconcebidos

por la parcialidad de un lado y de otro, nos darán el contenido de una verdadera exposición histórica, base del juicio definitivo que merezca el ejercicio de la soberanía colonial de España en este continente.

Para que pueda apreciarse la importancia del contenido de este libro interesantísimo, voy a referirme brevemente a algunas de las materias en él tratadas. Bajo el epígrafe de "Hechos probatorios de protección" el autor cita, entre otras, la reclamación de los yanaconas contra el capitán don Francisco de Belalcázar, hijo del Adelantado, porque éste había construido en terreno perteneciente a dichos indios, que se falló en favor de los demandantes, ordenándose el derribo de lo edificado a costa de Belalcázar, con prevención de que se respetase siempre el derecho de los yanaconas. Y la sentencia dictada contra el licenciado Antonio Castaño, cura de Tunía, por haber dado azotes al cacique del mismo pueblo, en la cual se reprende e impone multa al sacerdote denunciado. Y otras resoluciones recaídas en favor de los indios contra españoles y mestizos que habían invadido sus tierras o que exigían el pago de prestaciones indebidas.

Después de transcribir el texto de varias resoluciones en que se falla a favor de los indios y se invoca la doctrina legal de protección de sus derechos, el autor refiere múltiples casos de disposiciones testamentarias otorgadas por funcionarios y encomenderos, en las que se dejan mandas y legados importantes, de bienes de toda clase, a los indios que durante la vida del testador estuvieron a su cargo y servicio.

Contiene el libro un capítulo dedicado a los llamados "juicios de residencia" contra funcionarios que cesaban en el ejercicio de sus cargos, en el cual demuestra, con copia de las preguntas que en alguno se hicieron, que la investigación comprendía con carácter preferente todo lo relativo al cumplimiento de las obligaciones concernientes a la protección y defensa de los indios.

Es de sumo interés el capítulo destinado a los pleitos que surgieron con motivo de las reclamaciones formuladas por los indios respecto del derecho de propiedad de determinadas tierras, demostrándose con la transcripción de los fundamentos de los fallos dictados, favorables a los demandantes, que se administró justicia con celo y recta intención.

Estúdianse en otros capítulos del libro diferentes aspectos de la acción colonial cuya referencia haría demasiado larga esta reseña. Y al final se inserta el texto completo de la "Instrucción" para el mejor gobierno de los pueblos de indios, en la que desarrollando los preceptos

de la legislación general se dictan preceptos reglamentarios inspirados en un sentido de justicia y de buena voluntad hacia los indios que merece la más alta estimación.

No contiene el libro del señor Arboleda resolución alguna desfavorable a los indios, lo cual, claro es, no prueba que todos los fallos dictados por las autoridades se hayan inspirado en la misma tendencia. No creo, por otra parte, que el contenido de este libro constituya elemento de juicio suficiente para calificar la acción colonial, en la Gobernación de Popayán y en su territorio. Se limita a exponer hechos de positiva significación, que autorizan para decir que la acción oficial estuvo ajustada en muchos casos a los principios de justicia y humanidad en que se inspiraron las Leyes de Indias. El fallo definitivo de la historia requiere un estudio más amplio, y mejor aún completo, de todas las fuentes de investigación.

Aunque la aportación del señor Arboleda es muy valiosa por todos conceptos, la principal significación que yo le atribuyo es la de señalar el camino recto para quienes sinceramente deseen contribuir con sus investigaciones al esclarecimiento de la verdad histórica, respecto del trato que los españoles dieron a los indios durante el período colonial. La empresa merece ciertamente los mayores esfuerzos.

JERÓNIMO MALLO
*Universidad de Iowa,
Iowa City, Iowa.*